


CONTESTACIÓN DEMANDA SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. || DTE: LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ.|| DDO: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.|| RAD: 76001310500320240030400

Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Mar 30/07/2024 16:29

Para: Juzgado 03 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: liz94c@hotmail.com <liz94c@hotmail.com>; Sol Angelica <procesos@tiradoescobar.com>

 1 archivos adjuntos (2 MB)

CONTESTACIÓN DEMANDA SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA - LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ Y ANEXOS.pdf;

Señores

JUZGADO TERCERO (003) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

Proceso: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
Demandante: LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ.
Demandados: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Radicación: 76001310500320240030400.

Asunto: CONTESTACIÓN DEMANDA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado judicial de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** identificada con NIT 890903790-5. Siendo esta la oportunidad procesal oportuna y encontrándome dentro del término previsto para ello, manifiesto que mediante el presente libelo procedo a contestar la demanda impetrada por la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** contra de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 3° de la Ley 2213 de 2022, se remite copia del presente mensaje y se adjunta CONTESTACIÓN A LA DEMANDA (38 FOLIOS) a los correos electrónicos de las partes del proceso.

Por otra parte, solicito se acuse de recibido el presente correo y su archivo adjunto.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. 19.395.114 de Bogotá D.C

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

CAV

NOTIFICACIONES

E- mail: notificaciones@gha.com.co / Contactos: (+57) 315 577 6200 - 602 659 4075



Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

Señores

JUZGADO TERCERO (003) LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI

j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

Proceso: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
Demandante: LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ.
Demandados: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Radicación: 76001310500320240030400.

Asunto: CONTESTACIÓN DEMANDA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado judicial de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** identificada con NIT 890903790-5. Siendo esta la oportunidad procesal oportuna y encontrándome dentro del término previsto para ello, manifiesto que mediante el presente libelo procedo a contestar la demanda impetrada por la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** contra de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, en los siguientes términos:

CAPÍTULO I **CONTESTACIÓN FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

FRENTE AL HECHO PRIMERO: ES CIERTO que la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** nació el 20/10/1994, teniendo en cuenta que en el acervo probatorio se observa documento de identidad, que confirma lo mencionado por el apoderado de la demandante.

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: NO ME CONSTA, que demandante cotizó para los riesgos de invalidez, vejez y muerte a COLFONDOS S.A. un total de 111.43 semanas, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

FRENTE AL HECHO TERCERO: ES CIERTO que la demandante el 12 de marzo de 2022 fue valorada por parte de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, con lo cual se emitió el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral del 24/03/2022, en la cual se determinó una PCL de 52.72% de origen laboral con fecha de estructuración del 01/03/2022.

FRENTE AL HECHO CUARTO: ES CIERTO que, en consecuencia, mi representada procedió a reconocer la pensión de invalidez de la demandante en cuantía inicial para el 2022 de \$4.789.952, conforme a lo informado mediante oficio del 04 de abril de 2022.

FRENTE AL HECHO QUINTO: NO ES CIERTO por cuanto la liquidación de la pensión de invalidez efectuada por mi representada se encuentra ajustada a derecho y no hay lugar a reliquidarla bajo las afirmaciones infundadas y carentes de sustento normativo presentadas por la parte actora, esto teniendo en cuenta que:

(i) Para el cálculo del monto de la pensión de invalidez se tuvo en cuenta el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, el cual indica: "(...) a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación (...)" **por ende, a la demandante se le aplicó el monto del 60% del IBL porque la PCL es del 52.72%.**

(ii) Para el cálculo del IBL se tuvo en cuenta el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, el cual reza: "(...) a) Para accidentes de trabajo. El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los **seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior** a la base de cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado (...).

Sobre el particular, se debe de tener en cuenta que el accidente trabajo data del 27/07/2020, es decir que, en principio se le promediaría el IBC de los seis meses anteriores a la ocurrencia del Accidente de Trabajo, sin embargo, se resalta que la demandante inició a cotizar al subsistema de riesgos laborales solo hasta el **01/03/2020**, por lo que resulta imposible efectuar el promedio de los seis meses anteriores, razón por la cual, se procedió a liquidar sobre la fracción de meses (de marzo a julio) ya que el tiempo laborado es inferior al lapso señalado.

Con fundamento en lo expuesto, para el año 2022 a la demandante se le otorgó una mesada pensional de \$ 4.789.952, teniendo en cuenta un IBL \$7.983.253 y aplicando como monto de la pensión de invalidez un 60% del IBC, pues la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** tiene una PCL del 52.72%.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la pensión de invalidez se comienza a disfrutar desde el día en que se dejó de recibir el subsidio por incapacidad temporal, por lo tanto, a pesar de que la fecha de estructuración de la PCL de la demandante data del 01/03/2022, la prestación económica se reconoció a partir de la finalización de la última incapacidad médica, esto es, desde el **29/06/2022**. Tal como lo enuncia el parágrafo 2° del artículo 10 de la Ley 776 de 2002:

“(...) PARÁGRAFO 2o. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento. (...)”

Conforme a lo anterior, no hay lugar a la reliquidación de la mesada pensional de la demandante, puesto que la misma se liquidó bajo los parámetros del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 y el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, siendo reconocida por un valor de \$4.789.952 para el año 2022.

FRENTE AL HECHO SEXTO: ES CIERTO que la demandante el 14/06/2022 solicitó la reliquidación de la pensión de invalidez a partir el 01/03/2022.

No obstante, el apoderado de la demandante omite indicar que la liquidación de la pensión de invalidez se realizó bajo los parámetros establecidos en el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, teniendo en cuenta la historia laboral se tomó un IBL \$7.983.253, aplicando como monto de la pensión de invalidez el 60% del IBL, pues la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** tiene una PCL del 52.72%.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la pensión de invalidez se comienza a disfrutar desde el día en que se dejó de recibir el subsidio por incapacidad médica, por lo tanto, a pesar de que la fecha de estructuración de la PCL de la demandante data del 01/03/2022, la prestación económica se reconoció a partir de la finalización de la última incapacidad médica, esto es, desde el 29/06/2022.

Por otro lado, se precisa que para el cálculo del IBL se tuvo en cuenta el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, el cual reza: “(...) a) **Para accidentes de trabajo. El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado (...).** Sobre el particular, se debe de tener en cuenta que el accidente trabajo data del 27/07/2020, es decir que, en principio se le promediaría el IBC de los seis meses anteriores a la ocurrencia del AT, sin embargo, se resalta que la demandante inició a cotizar al subsistema de riesgos laborales solo hasta el **01/03/2020**, por lo que resulta imposible efectuar el promedio de los seis meses anteriores, razón por la cual, se procedió a liquidar sobre la fracción de meses ya que el tiempo laborado es inferior al lapso señalado.

Conforme a lo anterior, no hay lugar a la reliquidación de la mesada pensional de la demandante, puesto que la misma se liquidó bajo los parámetros del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 y el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, siendo reconocida por un valor de \$4.789.952 para el año 2022.

FRETEN AL HECHO SÉPTIMO: ES CIERTO por cuanto la liquidación de la pensión de invalidez efectuada por mi representada se encuentra ajustada a derecho y no hay lugar a reliquidarla bajo

las afirmaciones infundadas y carentes de sustento normativo presentadas por la parte actora, esto teniendo en cuenta que:

(i) Para el cálculo del monto de la pensión de invalidez se tuvo en cuenta el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, el cual indica: “(...) a) *Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación (...)*” por ende, a la demandante se le aplicó el monto del 60% del IBL porque la PCL es del 52.72%.

(ii) Para el cálculo del IBL se tuvo en cuenta el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, el cual reza: “(...) a) *Para accidentes de trabajo. El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los **seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado (...)***”.

Sobre el particular, se debe de tener en cuenta que el accidente trabajo data del 27/07/2020, es decir que, en principio se le promediaría el IBC de los seis meses anteriores a la ocurrencia del AT, sin embargo, se resalta que la demandante inició a cotizar al subsistema de riesgos laborales solo hasta el **01/03/2020**, por lo que resulta imposible efectuar el promedio de los seis meses anteriores, razón por la cual, se procedió a liquidar sobre la fracción de meses (de marzo a julio) ya que el tiempo laborado es inferior al lapso señalado.

Con fundamento en lo expuesto, para el año 2022 a la demandante se le otorgó una mesada pensional de \$ 4.789.952, teniendo en cuenta un IBL \$7.983.253 y aplicando un monto de la pensión correspondiente al 60% del IBL, pues la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** tiene una PCL del 52.72%.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la pensión de invalidez se comienza a disfrutar desde el día en que se dejó de recibir el subsidio por incapacidad temporal, por lo tanto, a pesar de que la fecha de estructuración de la PCL de la demandante data del 01/03/2022, la prestación económica se reconoció a partir de la finalización de la última incapacidad médica, esto es, desde el **29/06/2022**. Tal como lo enuncia el parágrafo 2° del artículo 10 de la Ley 776 de 2002:

“(...) PARÁGRAFO 2o. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento. (...)”

Conforme a lo anterior, no hay lugar a la reliquidación de la mesada pensional de la demandante, puesto que la misma se liquidó bajo los parámetros del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 y el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, siendo reconocida por un valor de \$4.789.952 para el año 2022.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

ME OPONGO a la totalidad de las pretensiones de la demanda, tanto a las declarativas como a las condenatorias, por cuanto carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, en el entendido de que el sustento normativo o razones de derecho en que se fundan las pretensiones de la demanda, corresponden a preceptos de la Ley 100 de 1993, especialmente, respecto del IBL para calcular pensiones de invalidez de origen común y tasa de reemplazo, por lo tanto, es importante, ilustrarle a la parte demandante que la pensión reconocida por la administradora de riesgos laborales que represento, corresponde a una pensión de invalidez de origen laboral, misma que debe ser liquidada bajo la normatividad que regula la materia, esto es, bajo los parámetros normativos de la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, resaltando que lo reclamado bajo normas disímiles a las enunciadas, especialmente normas que regulan riesgos de origen COMUN, resulta inoperante aplicarlas al asunto que hoy nos convoca.

Ahora, respecto a la pensión de invalidez liquidada y pagada por **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 27/07/2020, se indica que la misma se encuentra ajustada a derecho y no hay lugar a una reliquidación teniendo en cuenta que (i) para el cálculo del monto de la pensión de invalidez, se aplicó el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, empleando un porcentaje del 60% del IBL ya que la PCL de la demandante es

del 52.72% y (ii) para el cálculo del IBL se tuvo en cuenta lo preceptuado en el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, promediando el IBC de la fracción de meses cotizados ya que el tiempo laborado resultó inferior a los seis meses enunciados en el artículo ibidem.

Con fundamento en lo expuesto, para el año 2022 a la demandante se le otorgó una mesada pensional de \$ 4.789.952, teniendo en cuenta un IBL \$7.983.253 y aplicando un monto de la pensión correspondiente al 60% del IBL, pues la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** tiene una PCL del 52.72%.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la pensión de invalidez se comienza a disfrutar desde el día en que se dejó de recibir el subsidio por incapacidad temporal, por lo tanto, a pesar de que la fecha de estructuración de la PCL de la demandante data del 01/03/2022, la prestación económica se reconoció a partir de la finalización de la última incapacidad médica, esto es, desde el **29/06/2022**. Tal como lo enuncia el parágrafo 2° del artículo 10 de la Ley 776 de 2002:

“(...) PARÁGRAFO 2o. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento. (...)”

Conforme a lo anterior, no hay lugar a la reliquidación de la mesada pensional de la demandante, puesto que la misma se liquidó bajo los parámetros del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 y el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, siendo reconocida por un valor de \$4.789.952 para el año 2022.

Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto, procedo a pronunciarme sobre cada pretensión de la siguiente manera:

FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA: ME OPONGO a que se condene a mi representada a reliquidar la pensión de invalidez que le fue reconocida a la demandante, reiterándose que mi prohijada no le asiste obligación, por cuanto la misma se liquidó bajo los parámetros del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 respecto del monto de la pensión y el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012 respecto del IBL, siendo necesario precisar:

- Las pretensiones carecen de fundamentos fácticos y jurídicos en el entendido de que el sustento normativo o razones de derecho sobre las que se fundan, corresponden a preceptos normativos de la Ley 100 de 1993, especialmente, respecto del IBL para calcular pensiones de invalidez de origen común y la tasa de reemplazo aplicable, por lo tanto, es importante ilustrarle a la parte demandante que la pensión reconocida por la administradora de riesgos laborales que represento, corresponde a una pensión de invalidez de origen laboral, misma que debe ser liquidada bajo la normatividad que regula la materia, esto es, bajo los preceptos normativos de la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, resaltando que lo reclamado bajo normas disímiles a las enunciadas, especialmente normas que regulan riesgos de origen COMUN, resulta inoperante aplicarlas al asunto que hoy nos convoca.
- En lo que concierne a la pensión de invalidez liquidada y pagada por **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 27/07/2020, se indica que la misma se encuentra ajustada a derecho y no hay lugar a una reliquidación teniendo en cuenta que:

(i) Para el cálculo del monto de la pensión de invalidez se tuvo en cuenta el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, el cual indica: *“(...) a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación (...)”* por ende, a la demandante se le aplicó el monto del 60% del IBL porque la PCL es del 52.72%.

(ii) Para el cálculo del IBL se tuvo en cuenta el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, el cual reza: *“(...) a) Para accidentes de trabajo. El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los **seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado (...).***

Sobre el particular, se debe de tener en cuenta que el accidente trabajo data del 27/07/2020, es decir que, en principio se le promediaria el IBC de los seis meses anteriores a la ocurrencia del AT, sin embargo, se resalta que la demandante inició a cotizar al subsistema de riesgos laborales solo hasta el **01/03/2020**, por lo que resulta imposible efectuar el promedio de los seis meses anteriores, razón por la cual, se procedió a liquidar sobre la fracción de meses entre marzo y julio del año 2020.

Con fundamento en lo expuesto, para el año 2022 a la demandante se le otorgó una mesada pensional de \$ 4.789.952, teniendo en cuenta un IBL \$7.983.253 y aplicando un monto de la pensión correspondiente al 60% del IBL, pues la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** tiene una PCL del 52.72%.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la pensión de invalidez se comienza a disfrutar desde el día en que se dejó de recibir el subsidio por incapacidad temporal, por lo tanto, a pesar de que la fecha de estructuración de la PCL de la demandante data del 01/03/2022, la prestación económica se reconoció a partir de la finalización de la última incapacidad médica, esto es, desde el **29/06/2022**. Tal como lo enuncia el parágrafo 2° del artículo 10 de la Ley 776 de 2002:

“(...) PARÁGRAFO 2o. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento. (...)”

Conforme a lo anterior, no hay lugar a la reliquidación de la mesada pensional de la demandante, puesto que la misma se liquidó bajo los parámetros del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 y el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, siendo reconocida por un valor de \$4.789.952 para el año 2022.

FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: ME OPONGO a que se condene a mi representada a reliquidar la pensión de invalidez que le fue reconocida a la demandante, reiterándose que mi prohijada no le asiste obligación, por cuanto la misma se liquidó bajo los parámetros del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 respecto del monto de la pensión y el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012 respecto del IBL, siendo necesario precisar:

- Las pretensiones carecen de fundamentos fácticos y jurídicos en el entendido de que el sustento normativo o razones de derecho sobre las que se fundan, corresponden a preceptos normativos de la Ley 100 de 1993, especialmente, respecto del IBL para calcular pensiones de invalidez de origen común y la tasa de reemplazo aplicable, por lo tanto, es importante ilustrarle a la parte demandante que la pensión reconocida por la administradora de riesgos laborales que represento, corresponde a una pensión de invalidez de origen laboral, misma que debe ser liquidada bajo la normatividad que regula la materia, esto es, bajo los preceptos normativos de la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, resaltando que lo reclamado bajo normas disímiles a las enunciadas, especialmente normas que regulan riesgos de origen COMUN, resulta inoperante aplicarlas al asunto que hoy nos convoca.
- En lo que concierne a la pensión de invalidez liquidada y pagada por **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 27/07/2020, se indica que la misma se encuentra ajustada a derecho y no hay lugar a una reliquidación teniendo en cuenta que:

(i) Para el cálculo del monto de la pensión de invalidez se tuvo en cuenta el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, el cual indica: “(...) a) *Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación (...)*” por ende, a la demandante se le aplicó el monto del 60% del IBL porque la PCL es del 52.72%.

(ii) Para el cálculo del IBL se tuvo en cuenta el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, el cual reza: “(...) a) *Para accidentes de trabajo. El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los **seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización***”

declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado (...).

Sobre el particular, se debe de tener en cuenta que el accidente trabajo data del 27/07/2020, es decir que, en principio se le promediaría el IBC de los seis meses anteriores a la ocurrencia del AT, sin embargo, se resalta que la demandante inició a cotizar al subsistema de riesgos laborales solo hasta el **01/03/2020**, por lo que resulta imposible efectuar el promedio de los seis meses anteriores, razón por la cual, se procedió a liquidar sobre la fracción de meses entre marzo y julio del año 2020.

Con fundamento en lo expuesto, para el año 2022 a la demandante se le otorgó una mesada pensional de \$ 4.789.952, teniendo en cuenta un IBL \$7.983.253 y aplicando un monto de la pensión correspondiente al 60% del IBL, pues la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** tiene una PCL del 52.72%.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la pensión de invalidez se comienza a disfrutar desde el día en que se dejó de recibir el subsidio por incapacidad temporal, por lo tanto, a pesar de que la fecha de estructuración de la PCL de la demandante data del 01/03/2022, la prestación económica se reconoció a partir de la finalización de la última incapacidad médica, esto es, desde el **29/06/2022**. Tal como lo enuncia el parágrafo 2° del artículo 10 de la Ley 776 de 2002:

“(...) PARÁGRAFO 2o. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento. (...)”

Conforme a lo anterior, no hay lugar a la reliquidación de la mesada pensional de la demandante, puesto que la misma se liquidó bajo los parámetros del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 y el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, siendo reconocida por un valor de \$4.789.952 para el año 2022.

FRENTE A LA PRETENSIÓN TERCERA: ME OPONGO a que se condene a m representada por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por un valor de \$18.367.093, por cuanto, el artículo 141 de Ley 100 de 1993 establece que estos serán procedentes únicamente en caso de mora en el pago de mesadas pensionales, así entonces, se evidencia que mi representada, **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, hasta la fecha ha actuado de buena fe, en cumplimiento de la ley y la jurisprudencia actual, al haber realizado la liquidación de la prestación bajo la normatividad aplicable al caso y consigo, reconocer y pagar la pensión de invalidez a la demandante.

FRENTE A LA PRETENSIÓN CUARTA: ME OPONGO a que se condene a mi representada a la indexación de las sumas adeudas, por cuanto, se evidencia que mi representada, **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, hasta la fecha ha actuado de buena fe, en cumplimiento de la ley y la jurisprudencia actual, al haber realizado la liquidación de la prestación bajo la normatividad aplicable al caso y consigo, reconocer y pagar la pensión de invalidez a la demandante.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta, que los intereses moratorios y la indexación son conceptos excluyentes entre sí, toda vez, que la postura jurisprudencial sostiene que una vez se aplica el interés moratorio, este comprende el valor de la indexación, es decir, que, si los conceptos pretendidos en esta demanda se reconocen y pagan los intereses moratorios, habrá de entenderse que no es procedente que, de manera simultánea se condene a la indexación, como quiera que los primeros llevan implícita la actualización de la moneda.

FRENTE A LA PRETENSIÓN QUINTA: ME OPONGO a esta pretensión en la medida en que mi procurada no puede ser condenada en costas y agencias en derecho, cuando ha actuado de buena fe en cumplimiento de la normatividad vigente para la liquidación de la pensión de invalidez de la demandante.

CAPITULO II. **EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA**

Como excepciones perentorias propongo las siguientes:

1. **INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. RESPECTO DE LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ RECONOCIDA A LA DEMANDANTE.**

La presente excepción tiene fundamento en el artículo 10° de la Ley 776 de 2002 el cual regula el monto de la pensión de invalidez de origen laboral y, el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012 respecto del cálculo del IBL, ya que la parte demandante aduce que la liquidación efectuada por la ARL SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. presenta yerros en el cálculo del IBL y del porcentaje aplicable para deducir el monto de la pensión. Para el caso en concreto, se tiene que mi representada reconoció y pagó a la demandante la pensión de invalidez como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 27/07/2020, prestación que no hay lugar a reliquidar en cuenta que (i) para el cálculo del monto de la pensión de invalidez, se aplicó el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, empleando un porcentaje del 60% del IBL ya que la PCL de la demandante es del 52.72% y (ii) para el cálculo del IBL se tuvo en cuenta lo preceptuado en el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, promediando el IBC de la fracción de meses cotizados desde marzo a julio de 2020 ya que la demandante inició cotizaciones en el SGRL solo hasta el 01/03/2020.

Al respecto, el artículo 10 de la Ley 776 de 2002 en su tenor literal reza:

*“**Artículo 10.** Monto de la pensión de invalidez. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso:*

a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación;

b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación;

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%).

Parágrafo 1°. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes.

Parágrafo 2°. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento.

El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente.” (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Por lo mencionado en la normatividad citada, el monto de la pensión de invalidez reconocida a la actora correspondió sobre el 60% del IBL ya que la PCL de la señora ANAYA corresponde al 52.72%, porcentaje que se encuentra dentro del rango enunciado en el literal a del artículo en cita.

En línea con lo expuesto, en lo concerniente al IBL, el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012 señala:

“ARTÍCULO 5o. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las prestaciones económicas lo siguiente:

a) Para accidentes de trabajo

El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado;

b) Para enfermedad laboral

El promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base de Cotización (IBC) anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral.

En caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa se tomará el promedio del último año, o fracción de año si el tiempo laborado fuese inferior, del Ingreso Base de Cotización (IBC) declarada e inscrita en la última Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación. (...)” (Negrilla y subrayado por fuera del texto original.

Sobre el particular, se debe de tener en cuenta que el accidente trabajo data del 27/07/2020, es decir que, en principio se le promediaría el IBC de los seis meses anteriores a la ocurrencia del AT, sin embargo, se resalta que la demandante inició a cotizar al subsistema de riesgos laborales solo hasta el 01/03/2020, por lo que resulta imposible efectuar el promedio de los seis meses anteriores, razón por la cual, se procedió a calcular el IBL sobre la fracción de meses entre marzo y julio del año 2020.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2223 del 2023 ha delimitado sobre la liquidación de la pensión de invalidez lo siguiente:

“(…)

En relación con el monto de la pensión de invalidez derivada de accidente o enfermedad profesional, el artículo 48 del decreto citado en el párrafo precedente, fue modificado por el artículo 10 de la Ley 776 de 2002.

Por su parte, el ingreso base de liquidación (IBL) de la prestación económica cuando sucede un accidente de trabajo es el promedio del ingreso base de cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo, o fracción de meses si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la ARL a la que se encuentre afiliado.”

En ese sentido se concluye que, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012 el IBL asciende a la suma de \$7.983.253, promediando la fracción de meses cotizados en razón a que el tiempo laborado resultó inferior a 6 meses y conforme al artículo 10 de la Ley 776 de 2002 al IBL de \$7.983.253 se le aplicó el 60% como monto de la pensión de invalidez, al encontrarse la PCL de la demandante entre el 50% y el 66% y, como resultado, se obtuvo una mesada pensional de \$4.789.952 para el año 2022, la cual fue pagada a partir del 29/06/2022, por encontrarse la actora con incapacidades medicas temporales hasta el 28/06/2022, ultimas que fueron debidamente pagadas por mi representada **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** Por lo tanto, como quiera que nos encontramos ante la ausencia de los requisitos necesarios para que exista una diferencia pensional, se deberá despachar desfavorablemente las pretensiones elevadas por la demandante, pues no logra acreditar de manera eficaz que la pensión de invalidez reconocida por mi representada se liquidó de manera errónea.

En virtud de lo anterior ruego declarar probada esta excepción.

2. IMPOSIBILIDAD DE LIQUIDAR UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ DE ORIGEN LABORAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y SS DE LA LEY 100 DE 1993, YA QUE LAS PRESTACIONES OTORGADAS POR EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES ESTÁN CONTEMPLADAS EN NORMATIVIDAD ESPECIAL (LEY 776 DE 2003 Y LEY 1562 DE 2012)

Fundamento esta excepción en el hecho de que con la expedición de la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema General de Seguridad Social, creando dentro de sí, los subsistemas de Riesgos Laborales y de Sistema General de Pensiones, precisándose que los mismos están regulados por

diferentes normatividades y dirigidos a la cobertura de contingencias distintas, por un lado, el Subsistema de Riesgos Laborales está dirigido a cubrir las contingencia ocasionadas en el trabajo, y se encuentra regulado por la Ley 776 de 2002, la Ley 1562 de 2012, entre otras, por otro lado, el Subsistema General de Pensiones está destinado a cubrir las contingencias de origen común, y se encuentra regulado por la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003, la Ley 860 de 2003, entre otras. Para el caso en concreto, se tiene que las pretensiones de la demanda carecen de fundamento jurídico ya que el sustento utilizado por la parte actora se centra en solicitar una reliquidación de la pensión de invalidez trayendo a colación normas propias que regulan los riesgos de origen común, es decir, Ley 100 de 1993, por lo tanto, debe advertirse que la pensión reconocida por la administradora de riesgos laborales que represento, corresponde a una **pensión de invalidez de origen laboral y, con fundamento en ello, la misma se liquidó bajo los parámetros enunciados en la normatividad que regula la materia, esto es, bajo los preceptos normativos de la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012,** resaltando que lo reclamado bajo normas disimiles a las enunciadas, especialmente normas que regulan riesgos de origen común, resulta inoperante aplicarlas al asunto que hoy nos convoca.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3869 de 2021 sobre este tema menciona:

“En efecto, la pensión de invalidez de origen laboral cubre el riesgo derivado del trabajo, cuando una persona en razón de las condiciones o el ambiente en el que labora o por circunstancias relacionadas con este, sufre una enfermedad o enfrenta un accidente de trabajo que afecta su desempeño en determinado oficio. Por tanto, es una cobertura propia del trabajo, para cuyo aseguramiento los empleadores, mediante la afiliación y el pago de una prima o cotización, trasladan el riesgo al sistema, a fin de que este otorgue las prestaciones asistenciales y económicas previstas en la legislación.”

En el mismo sentido, en sentencia SL207 de 2022 la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral enuncia:

“Lo hasta acá descrito nos permite reafirmar que el Sistema de Seguridad Social es integral, esto es, es uno solo que, a través de la interacción coordinada de sus subsistemas, busca la cobertura de los servicios y prestaciones, de acuerdo con la contingencia que pueda recaer sobre sus afiliados, de manera que se complementa entre sí para concretar la protección de las personas que lo requieran.

Debe resaltarse que las prestaciones definidas por el legislador dentro de cada subsistema, con base en los principios enunciados, parte de la realidad de existencia de recursos limitados para la cobertura de las contingencias a las que se ve expuesta la población, por ello, dispuso que estos debían ser utilizados de la forma más eficiente de manera tal que el acceso a la seguridad social sea adecuado, oportuno y suficientes bajo la dirección y control estatal, evitando la duplicidad de cobertura por los subsistemas.”

En aras de exponer lo mencionado anteriormente, realizó las siguientes apreciaciones:

PENSIÓN INVALIDEZ ORIGEN COMÚN	PENSIÓN INVALIDEZ ORIGEN LABORAL
<p>Respecto al monto de la pensión de invalidez por riesgo común, señala el Artículo 40 de la Ley 100 de 1993:</p> <p><i>“El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a: El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en</i></p>	<ul style="list-style-type: none">Respecto del monto de la pensión de invalidez por riesgo laboral, señala el artículo 10 de la Ley 776 de 2002: <p><u>“Artículo 10. Monto de la pensión de invalidez. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso:</u></p> <p><u>a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez</u></p>

<p>su capacidad laboral es igual o superior al 66%. La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación. En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.”</p>	<p><u>equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación:</u></p> <p>b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación;</p> <p>c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%).</p> <p>Parágrafo 1°. Los pensionados por invalidez de origen profesional deberán continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes.</p> <p>Parágrafo 2°. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento.</p> <p><i>El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente.”</i> (Subrayado y negrilla fuera del texto)</p>
<p>Respecto del cálculo del IBL, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993:</p> <p>“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.</p> <p>Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”</p>	<ul style="list-style-type: none">• Respecto del cálculo del IBL, el artículo 5 del 1562 del 2012: <p>“ARTÍCULO 5o. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las prestaciones económicas lo siguiente:</p> <p><u>a) Para accidentes de trabajo</u></p> <p><u>El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado;</u></p> <p><u>b) Para enfermedad laboral</u></p> <p>El promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base de Cotización (IBC) anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral.</p> <p>En caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa se tomará el promedio del último año, o fracción de año si el tiempo laborado fuese inferior, del Ingreso Base de Cotización (IBC) declarada e inscrita en la última Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encontraba afiliado previo a dicha</p>

	<p>calificación.</p> <p>PARÁGRAFO 1o. Las sumas de dinero que las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales deben pagar por concepto de prestaciones económicas deben indexarse, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al momento del pago certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.</p> <p>PARÁGRAFO 2o. Para el caso del pago del subsidio por incapacidad temporal, la prestación será reconocida con base en el último (IBC) pagado a la Entidad Administradora de Riesgos Laborales anterior al inicio de la incapacidad médica las Administradoras de Riesgos Laborales deberán asumir el pago de la cotización a pensiones y salud, correspondiente a los empleadores o de los trabajadores independientes, durante los períodos de incapacidad temporal y hasta por un Ingreso Base de Cotización equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para estos sistemas en la Ley 100 de 1993.</p> <p>PARÁGRAFO 3o. <Ver Notas de Vigencia> El pago de la incapacidad temporal será asumido por las Entidades Promotoras de Salud, en caso de que la calificación de origen en la primera oportunidad sea común; o por la Administradora de Riesgos Laborales en caso de que la calificación del origen en primera oportunidad sea laboral y si existiese controversia continuarán cubriendo dicha incapacidad temporal de esta manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta Regional o Nacional si se apela a esta, cuando el pago corresponda a la Administradora de Riesgos Laborales y esté en controversia, esta pagará el mismo porcentaje estipulado por la normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, una vez el dictamen esté en firme podrán entre ellas realizarse los respectivos reembolsos y la ARP reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen en firme indique que correspondía a origen laboral.”</p>
--	---

Así las cosas, se evidencia que el sustento normativo o razones de derecho sobre las que se fundan las pretensiones de la demanda, específicamente la solicitud de reliquidación corresponden a preceptos normativos de la Ley 100 de 1993, , por lo tanto, teniendo en cuenta que la pensión reconocida por la administradora de riesgos laborales que represento, corresponde a una **pensión de invalidez de origen laboral, esta debe ser liquidada bajo la normatividad que regula la materia, esto es, bajo los preceptos normativos de la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012.**

3. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR SIMULTÁNEAMENTE UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ DE ORIGEN LABORAL CON INCAPACIDADES TEMPORALES DEL MISMO ORIGEN.

Fundamento esta excepción en el hecho decantado por la jurisprudencia y la normatividad vigente, la cual establece que la pensión de invalidez se comienza a disfrutar desde el día en que se dejó de recibir el subsidio por incapacidad médica, toda vez, que no hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Para el caso en cuestión, tenemos como fecha de finalización de la última incapacidad el **28/06/2022**, por lo cual, le asiste razón a mi representada al reconocer la pensión de invalidez a partir del 29/06/2022, fecha en que comienza el disfrute de la pensión de invalidez, independientemente de que la fecha de estructuración de la demandante date del 01/03/2022.

Al respecto, el artículo 10 de la Ley 776 de 2002 en su tenor literal reza:

“Artículo 10. Monto de la pensión de invalidez. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso:

a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación;

b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación;

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%).

Parágrafo 1º. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes.

Parágrafo 2º. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento.

El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente.” (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T097 del 2015 manifiesta que no hay lugar al pago simultáneo de la incapacidad temporal y la pensión de invalidez en los siguientes términos:

*“si la fecha de estructuración de la invalidez coincide con el momento en que las incapacidades laborales se causan, se debe reconocer el derecho pensional y como éste se paga retroactivamente, **no hay lugar al pago simultáneo de la prestación por concepto de incapacidad y por concepto de pensión según lo establecido en el artículo décimo de la ley 776 de 2002.**”* (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Por su parte, sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, mediante sentencia CSJ SL5170-2020, reiterada en las CSJ SL5576-2021 y CSJ SL3913-2022, precisó:

*“[...] cuando existen subsidios por incapacidad temporal con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, [...] las mesadas se comienzan a pagar, de forma retroactiva, desde la data de la estructuración, **pero siempre que con posterioridad a ella no se hubieren reconocido subsidios por incapacidad, continuos o discontinuos, evento en el cual se pagará, pero a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad.**”*

Esa regla, por cuanto,

*“[...] la definición de un estado de invalidez generalmente viene precedida de un proceso patológico incapacitante que sufre el trabajador [...], lo que explica que **el reconocimiento pensional deba hacerse, una vez se extingue la última incapacidad temporal, quedando prohibida la alternancia, concurrencia o subsistencia de estas dos prestaciones dentro de un mismo período,** así se declare que el hecho invalidante existe desde una fecha anterior al período en que se pagó la incapacidad temporal.*

[...] téngase en cuenta que dentro del proceso incapacitante pueden existir períodos cortos e intermitentes de recuperación o mejoría de la salud del trabajador, durante los cuales la acción protectora de la seguridad social cesa para dar paso a las obligaciones remunerativas a cargo del empleador o a los ingresos que perciba el trabajador independiente, períodos en los cuales no se activa la protección de la seguridad social y, en consecuencia, no se pagan las dichas prestaciones.” (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Conforme a la normatividad y jurisprudencia en cita, el reconocimiento de la pensión de invalidez se dará a partir de la terminación de la última incapacidad médica, toda vez que no hay lugar a un cobro simultáneo a la ARL por estos dos conceptos, por lo tanto, las mesadas pensionales se comenzarán a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad, postura con la cual queda rectificada y delineada la posición de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de Colombia.

Descendiendo al caso en cuestión, tenemos que a la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** se le reconoció pensión de invalidez por tener un puntaje de Pérdida de Capacidad Laboral del 52.72% por enfermedad de origen laboral, con una fecha de estructuración del 01/03/2022; sin embargo, la prestación económica la cual fue pagada a partir del 29/06/2022, por encontrarse en incapacidad médica temporal hasta el 28/06/2022, incapacidades que fueron debidamente pagadas por mi representada **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

A manera de conclusión, es claro que no procede la reliquidación de la pensión de invalidez, ni el pago de retroactivo alguno, puesto a que a la demandante se le concedió la prestación económica en aplicación de la normatividad vigente a partir del 29/06/2022, toda vez que a pesar de tener fecha de estructuración de la invalidez del 01/03/2022, la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ**, se encontraba en incapacidad médica hasta el 28/06/2022, por lo cual, le asiste razón a mi representada al reconocer la pensión de invalidez a partir del 29/06/2022, fecha en que comienza el disfrute de la pensión de invalidez.

4. IMPROCEDENCIA DE QUE LA ARL SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. RECONOZCA INTERESES MORATORIOS

Se propone esta excepción en virtud de que mi procurada no está obligada al pago de los intereses moratorios que se reclaman en la demanda, ni tampoco al pago de las costas por cuanto, el artículo 141 de Ley 100 de 1993 establece que estos serán procedentes únicamente en caso de mora en el pago de mesadas pensionales, así entonces, se evidencia que mi representada, **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, hasta la fecha ha actuado de buena fe, en cumplimiento de la ley y la jurisprudencia actual, al haber realizado el estudio pertinente frente a la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez, reconociendo y pagando la mesada pensional a partir del 29/06/2022.

Al respecto el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cita lo siguiente:

ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago.

Se concluye de la cita anterior, que solo proceden los intereses moratorios cuando se presente mora en el pago de mesadas pensionales, sin embargo, en el presente caso no se constituye una mora comoquiera que las mesadas pensionales han sido pagadas satisfactoriamente desde la fecha de disfrute del derecho, sin que haya lugar a reliquidación alguna, motivo por el cual, la administradora de riesgos laborales no adeuda valor alguno a la demandante.

Aunado a lo anterior, es necesario señalar que, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral en sentencia SL787-2013 de 06/11/2013, con Magistrado Ponente Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, donde precisó:

“Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta siempre estuvo guiada por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia. Máxime que en Colombia el control difuso que es el que opera en las excepciones de inconstitucionalidad está a cargo de los jueces y no de las administradoras.”

En igual sentido, en sentencia del 10 de julio de 2013, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, Rad. 44905 SL444-2013, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, determinó cuánto surge el estado de mora, señalando lo siguiente:

“El aspecto jurídico atinente a la determinación del momento a partir del cual ha de entenderse que la administradora de pensiones está en mora de cubrir la obligación pensional para que haya lugar al pago de tales intereses, ha sido tratado por la Sala que, en sentencia de 12 de diciembre de 2007, rad. N° 32003, precisó que el estado de mora surge una vez vencido el término que la ley concede a la administradora de pensiones para proceder al reconocimiento y pago de la prestación, sin que lo haya hecho. No basta entonces, la reclamación por parte del interesado o beneficiario, sino que se debe dejar correr el término previsto legalmente para que la administradora dé respuesta a la solicitud, y sólo hasta ese momento si no se ha satisfecho la obligación o se hace tardíamente fuera de ese término, es dable predicar incumplimiento de su parte.”

Así mismo, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral en sentencia SL704-2013 del 02/10/2013, Rad. 44454 M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, reiteró la posición estableciendo:

“La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Por otro lado, se pone de presente lo citado en Sentencia SL843-2021 de la Corte Suprema de Justicia M.P. Gerardo Botero Zuluaga Rad. No. 71334, que señaló:

“la buena o mala fe o las circunstancias particulares que condujeron a la discusión del derecho pensional, no pueden ser consideradas para establecer la procedencia de los intereses moratorios de que trata el precepto bajo análisis, tal como se indicó en sentencias como la CSJ, SL 23 septiembre 2002, radicado 18512, SL 29 mayo 2003, radicado 18789, SL 13 junio 2012, radicado 42783, entre otras; pues no se concibe como un acto liberatorio de tales réditos, la negativa de la prestación pensional por el simple hecho de existir un motivo de duda sobre el surgimiento del derecho por parte de la administradora pensional, menos aún, fincada en la acreditación fáctica de la dependencia económica, como se esgrime y lo sustenta en el cargo la entidad demandada, o por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales previamente desarrollados por los jueces competentes frente a la materia en discusión, como se verificó en el presente caso.”

Con relación a lo citado, se indica que la buena o mala fe o las circunstancias que condujeron a la discusión del derecho pensional no puede ser consideradas para que se establezca la procedencia de los intereses moratorios, comoquiera que no se conciben como un acto liberatorio de tales réditos.

Con respecto a lo anterior, se entiende que solo serían procedentes los intereses moratorios si

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., al momento en que recibió la solicitud inicial del reconocimiento de la pensión de invalidez hubiese satisfecho la obligación de forma tardía generando un incumplimiento, pero, para el caso de marras, se observa que no hay lugar a reliquidar la prestación económica, y mi representada no adeuda valor alguno a la demandante. Se deduce entonces que los intereses moratorios son improcedentes en el presente caso por cuanto la **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** solo dio aplicación normativa al momento de reconocer y pagar la pensión de invalidez a la demandante por cuanto se reconoció bajos los preceptos del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 y el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, siendo de esta manera una decisión basada en un fundamento legal y no fue tomada de forma arbitraria por la administradora de riesgos laborales.

En conclusión, se indica que **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** siempre actuó movida por la buena fe y con estricta sujeción a la ley, comoquiera que reconoció la pensión de invalidez a la demandante **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** en aplicación del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 y el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, tal como se indica en la Jurisprudencia, así las cosas, no son procedentes los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales, toda vez que es posible aplicar la procedencia de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993.

5. IMPROCEDENCIA DE RECONOCER INTERESES MORATORIOS E INDEXACIÓN DE MANERA SIMULTÁNEA POR TRATARSE DE DOS PRESTACIONES QUE SE EXCLUYEN ENTRE SÍ.

Aunado a lo expuesto, si en gracia de discusión, se concediera la prestación y demás conceptos –intereses moratorios- no podrá imponerse condena por indexación sobre dichos conceptos, toda vez que dichas pretensiones son excluyentes entre sí, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral¹, en lo relativo a la incompatibilidad de una condena simultánea por intereses moratorios e indexación sobre los mismos conceptos.

Al respecto, basta con traer a colación lo sostenido en la sentencia de la CSJ SL, 6 sep. 2012, rad. 39140, en la que se dijo:

*“(…) que **el criterio actualmente imperante en la Sala es el de la incompatibilidad de intereses moratorios con la indexación**, ya que los primeros involucran, en su contenido, un ingrediente revaloratorio; tal como se dijo, al rectificar el antiguo criterio de compatibilidad de ambas figuras vertido en sentencia del 1° de diciembre de 2009, radicación 37279, en la sentencia del 6 de diciembre de 2011, radicación 41392, la que acogió, para ello, pronunciamiento de la Sala de Casación Civil de la esta misma Corporación datado el 19 de noviembre de 2001, expediente 6094”.*

En ese sentido, la Corporación ha indicado que, si bien se trata de dos conceptos diferentes, ya que los intereses moratorios corresponden a una sanción por mora, la indexación es la simple actualización de la moneda para contrarrestar la devaluación de esta por el transcurso del tiempo.

Sin embargo, ha sostenido que, dado que los intereses moratorios se pagan a “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”, este pago equivale a una suma considerablemente superior a la corrección monetaria o indexación, que alcanza para cubrir perfectamente la devaluación de la moneda.

Por lo tanto, la postura jurisprudencial sostiene que una vez se aplica el interés moratorio, este comprende el valor de la indexación, es decir, que, si los conceptos pretendidos en esta demanda se reconocen y pagan los intereses moratorios, habrá de entenderse que no es procedente que, de manera simultánea se condene a la indexación, como quiera que los primeros llevan implícita la actualización de la moneda.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA ARL SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

¹ Ver sentencias como: SL-1381/2019, SL-1442 de 2018, SL-9316 de 2016, SL-14269 de 2014, entre otras.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICA S.A. como administradora de riesgos laborales ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de sus obligaciones, la cuales se encuentran consagrada en el artículo 1° de la Ley 776 de 2002, durante el periodo que la actora estuvo vinculada ante la ARL que represento. El caso sub examine resulta menester aclarar que SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como administradora de Riesgos Laborales, ha cumplido con cada una de las prestaciones asistenciales y económicas y con los objetivos consagrados en el Sistema General de Riesgos Laborales, en virtud de la afiliación de la demandante. Dos claros ejemplos de ello es el reconocimiento y pago de las incapacidades temporales que se han emitido a favor de la demandante desde el 06/06/2020 hasta el 28/06/2022, y el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 29/06/2022, con una cuantía para el 2022 de \$ 4.789.952.

Sobre el tema, la Ley 1562 de 2012, establece:

“Artículo 1°. Definiciones: Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan...”

En el caso en concreto, resulta menester aclarar que SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como administradora de Riesgos Laborales, ha cumplido con cada una de las prestaciones asistenciales y económicas y con los objetivos consagrados en el Sistema General de Riesgos Laborales, en virtud de un accidente de trabajo el 27/07/2020 y con ocasión a este, mi representada le suministró todas las prestaciones asistenciales y económicas que se encontraban a su cargo”, haciendo seguimiento clínico de la patología mediante las citas de control que han sido asignadas a la demandante por mi representada, motivo por el cual no existe responsabilidad alguna de esta en el caso en concreto.

Aunado a lo anterior, debe ponerse de presente al despacho que mi representada en virtud del cumplimiento que le asiste como administradora de Riesgos Laborales, a la fecha de contestación de la demanda reconoció las siguientes Incapacidades Temporales:

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CONSULTA DE PAGO DE INCAPACIDADES POR CÉDULA / EXPEDIENTE

Expediente	Fecha Acc.	Controversia	Porcentaje de pago	Fecha Inicio Incap. Autor.	Fecha Fin Incap. Autor.	Días Incap. Autor.	Salario	Ajuste IPC	Total IBC	Mes Salario	Valor Autorizado	Fecha Proceso	Pagado al afiliado	Lote
CEDULA : 1144075353 NOMBRE : ANAYA LOPEZ LIZETH PAOLA														
CONTRATO : 094002918 NIT : 811007601 EMPRESA : GRUPO EMI S.A.														
C.T.PAGADOR:MEDICOS - ENFERMEROS Y ASESORI DIRECC 48 # 14 - 49 AVENIDA LAS VEGAS CIUDAD : MEDELLIN														
1310538443	05/06/2020	N	0	06/06/2020	06/06/2020	1	9.158.950	0	9.158.950	2020/05	367.884	24/07/2020	OPI	920624 1143878
1310538443	05/06/2020	N	0	08/07/2020	08/07/2020	1	10.706.998	0	10.706.998	2020/06	430.064	14/08/2020	OPI	928121 1145010
1310545098	27/07/2020	N	0	28/07/2020	10/08/2020	14	10.706.998	0	10.706.998	2020/06	6.020.302	01/09/2020	OPI	932316 1146260
1310545098	27/07/2020	N	0	11/08/2020	25/08/2020	15	10.706.998	0	10.706.998	2020/06	6.450.966	15/10/2020	OPI	943345 1147936
1310545098	27/07/2020	N	0	26/08/2020	24/09/2020	30	10.706.998	0	10.706.998	2020/06	12.901.533	15/10/2020	OPI	943345 1147936
1310545098	27/07/2020	N	0	24/11/2020	11/12/2020	18	6.891.562	36.985	6.928.547	2020/07	4.982.599	24/12/2020	OPI	965792 1151283
1310545098	27/07/2020	N	0	12/12/2020	10/01/2021	30	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	6.348.899	28/01/2021	OPI	978995 1153264
1310545098	27/07/2020	N	0	11/01/2021	25/01/2021	15	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	4.219.016	18/02/2021	OPI	985805 1154029
1310545098	27/07/2020	N	0	26/01/2021	31/01/2021	6	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	1.887.606	18/02/2021	OPI	985805 1154029
1310545098	27/07/2020	N	0	02/02/2021	25/02/2021	24	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	6.750.425	21/03/2021	OPI	998363 1155285
1310545098	27/07/2020	N	0	26/02/2021	27/03/2021	30	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	8.438.032	16/04/2021	OPI	1007712 1156027
1310545098	27/07/2020	N	0	28/03/2021	26/04/2021	30	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	8.438.032	22/04/2021	OPI	1010085 1156248
1310545098	27/07/2020	N	0	27/05/2021	25/06/2021	30	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	8.438.032	10/06/2021	OPI	1027453 1157835
1310545098	27/07/2020	N	0	27/04/2021	26/05/2021	30	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	8.438.032	10/06/2021	OPI	1027453 1157835
1310545098	27/07/2020	N	0	26/06/2021	25/07/2021	30	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	8.438.032	29/07/2021	OPI	1041299 1158762
1310545098	27/07/2020	N	0	25/10/2020	23/11/2020	30	6.891.562	0	6.891.562	2020/07	8.394.352	30/07/2021	OPI	1042046 1158967
1310545098	27/07/2020	N	0	25/10/2020	23/11/2020	30	10.707.000	0	10.707.000	2020/06	4.597.601	18/06/2021	OPI	1048464 1159867
1310545098	27/07/2020	N	0	11/01/2021	25/01/2021	15	10.707.000	172.383	10.879.383	2020/06	2.335.811	18/06/2021	OPI	1048466 1154029
1310545098	27/07/2020	N	0	26/01/2021	31/01/2021	6	10.707.000	172.383	10.879.383	2020/06	934.325	18/06/2021	OPI	1048466 1154029
1310545098	27/07/2020	N	0	12/12/2020	10/01/2021	30	10.707.000	57.461	10.764.461	2020/06	4.622.274	18/06/2021	OPI	1048466 1153264
1310545098	27/07/2020	N	0	24/11/2020	11/12/2020	18	10.707.000	0	10.707.000	2020/06	2.758.561	18/06/2021	OPI	1048466 1151283
1310545098	27/07/2020	N	0	25/09/2020	24/10/2020	30	10.706.998	0	10.706.998	2020/06	12.901.533	28/08/2021	OPI	1052416 1159844
1310545098	27/07/2020	N	0	03/08/2021	01/09/2021	30	908.528	0	908.528	2021/04	1.094.776	21/09/2021	OPI	1061886 1160519
1310545098	27/07/2020	N	0	30/07/2021	02/08/2021	4	908.528	0	908.528	2021/04	145.570	21/09/2021	OPI	1061886 1160519
1310545098	27/07/2020	N	0	02/09/2021	01/10/2021	30	908.528	0	908.528	2021/04	1.094.776	13/10/2021	OPI	1072741 1161381
1310545098	27/07/2020	N	0	02/09/2021	01/10/2021	30	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	7.343.256	03/11/2021	OPI	1080994 1161381
1310545098	27/07/2020	N	0	03/08/2021	01/09/2021	30	6.891.562	110.954	7.002.516	2020/07	7.343.256	03/11/2021	OPI	1080994 1160519

Fecha de Proceso : 30/06/2022 15:45

d_05_x_afiliado_x_dri SURATEP

Página 1 de 3

PRESTAEIC

F0195/09-0905/C

Adicionalmente, mediante oficio del 04 de abril de 2022 se le informó a la demandante que se le reconoció la pensión de invalidez en una cuantía del \$4.789.952 a partir del 29/06/2022, fecha de finalización de la última incapacidad medica temporal. En conclusión, mi representada ha cumplido con la prestación de servicios asistenciales y con el reconocimiento de prestaciones económicas, motivo por el cual no existe responsabilidad alguna de esta en el caso en concreto, sin perjuicio de reiterar que las pretensiones de la demanda se encuentran por fuera del espectro de cobertura

del sistema de riesgos laborales, tal como se ha argumentado a lo largo de este escrito.

6. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE PRESTACIONES ASISTENCIALES Y ECONÓMICAS DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

Pese a que mi representada de ninguna manera está obligada al reconocimiento y pago de la reliquidación de la mesada pensional a favor de la demandante y sin que constituya reconocimiento de responsabilidad alguna por parte de mi procurada, invoco como excepción la PRESCRIPCIÓN consagrada en el 22 de la Ley 1562 de 2012, la cual es propuesta en aras de la defensa de mi procurada.

ARTÍCULO 22. PRESCRIPCIÓN. Las mesadas pensionales y las demás prestaciones establecidas en el Sistema General de Riesgos Profesionales prescriben en el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que se genere, concrete y determine el derecho.

De conformidad con la normatividad descrita, encontramos que en el evento en que se establezca que a la demandante le asiste algún derecho a cargo del Sistema de Riesgos Laborales, frente a las mismas, debe ser analizado por el juzgado el fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta que de acuerdo con la línea jurisprudencial el término de prescripción se debe contar a partir del momento en que los derechos pretendidos se hacen exigibles no desde la fecha en que se hace efectivo.

Consecuentemente, ruego al señor Juez declarar probada esta excepción.

7. COBRO DE LO NO DEBIDO

Con fundamento en lo anterior, y una vez comprobados que no se acreditan los presupuestos para que SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. sea condenada al reconocimiento y pago de los conceptos que se reclaman, debe concluirse que condenar a mi procurada, al reconocimiento y pago de los rubros aducidos en el libelo de la demanda, se derivaría en un cobro de lo no debido, prohibido por nuestro ordenamiento jurídico.

Consecuentemente, ruego al señor Juez declarar probada esta excepción.

8. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Teniendo en cuenta que el enriquecimiento sin causa se configura cuando hay un enriquecimiento patrimonial a expensas de un empobrecimiento económico sin que medie causa legal para dicha relación, debe concluirse que condenar a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. al reconocimiento y pago de los rubros aducidos en el libelo de la demanda, sería un enriquecimiento sin causa, pues no existe ningún argumento legal para legitimar o justificar el más mínimo pago en favor de la demandante.

Por ello solicito declarar probada esta excepción.

9. COMPENSACIÓN

Sin que implique confesión o aceptación de los hechos de la demanda, se propone esta excepción teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 282 del Código General del Proceso, el cual es aplicable por analogía al CPT y de la SS.

10. GENÉRICA O INOMINADA

Excepción que se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 282 del CGP, aplicable por analogía, el cual indica: “En cualquier clase de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda...”

CAPITULO IV
HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA

En el caso de marras, la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** interpuso demanda ordinaria laboral en contra de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, con el propósito de que se le reconozca y pague la reliquidación de la mesada pensional de la pensión de invalidez a partir del 01/03/2022, junto con las mesadas retroactivas, intereses moratorios, costas y agencias en derecho.

En este sentido, esbozaré los argumentos para que Despacho niegue todas y cada una de las pretensiones de la demanda:

- De conformidad con el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012 el IBL asciende a la suma de \$7.983.253, promediando la fracción de meses cotizados en razón a que el tiempo laborado resultó inferior a 6 meses y conforme al artículo 10 de la Ley 776 de 2002 al IBL de \$7.983.253 se le aplicó el 60% como monto de la pensión de invalidez, al encontrarse la PCL de la demandante entre el 50% y el 66% y, como resultado, se obtuvo una mesada pensional de \$4.789.952 para el año 2022, la cual fue pagada a partir del 29/06/2022, por encontrarse la actora con incapacidades medicas temporales hasta el 28/06/2022, ultimas que fueron debidamente pagadas por mi representada **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** Por lo tanto, como quiera que nos encontramos ante la ausencia de los requisitos necesarios para que exista una diferencia pensional, se deberá despachar desfavorablemente las pretensiones elevadas por la demandante, pues no logra acreditar de manera eficaz que la pensión de invalidez reconocida por mi representada se liquidó de manera errónea.
- Se evidencia que el sustento normativo o razones de derecho sobre las que se fundan las pretensiones de la demanda, específicamente la solicitud de reliquidación corresponden a preceptos normativos de la Ley 100 de 1993, especialmente, respecto del IBL para calcular pensiones de invalidez de origen común, por lo tanto, teniendo en cuenta que la pensión reconocida por la administradora de riesgos laborales que represento, corresponde a una **pensión de invalidez de origen laboral, esta debe ser liquidada bajo la normatividad que regula la materia, esto es, bajo los preceptos normativos de la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012,** resaltando que lo reclamado bajo normas disimiles a las enunciadas, especialmente normas que regulan riesgos de origen común, resulta inoperante aplicarlas al asunto que hoy nos convoca.
- Es claro que no procede la reliquidación de la pensión de invalidez, ni el pago de retroactivo alguno, puesto a que a la demandante se le concedió la prestación económica en aplicación de la normatividad vigente a partir del 29/06/2022, toda vez que a pesar de tener fecha de estructuración de la invalidez del 01/03/2022, la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ**, se encontraba en incapacidad medica hasta el **28/06/2022**, por lo cual, le asiste razón a mi representada al reconocer la pensión de invalidez a partir del 29/06/2022, fecha en que comienza el disfrute de la pensión de invalidez.
- El caso sub examine resulta menester aclarar que **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** como administradora de Riesgos Laborales, ha cumplido con cada una de las prestaciones asistenciales y económicas y con los objetivos consagrados en el Sistema General de Riesgos Laborales, en virtud de la afiliación de la demandante. Dos claros ejemplos de ello es el reconocimiento y pago de las incapacidades temporales que se han emitido a favor de la demandante desde el 06/06/2020 hasta el 28/06/2022, y el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 29/06/2022, con una cuantía para el 2022 de \$ 4.789.952.
- **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** siempre actuó movida por la buena fe y con estricta sujeción a la ley, comoquiera que reconoció la pensión de invalidez a la demandante **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** en aplicación del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, tal como se indica en la Jurisprudencia, así las cosas, no son procedentes los intereses

moratorios sobre las mesadas pensionales, toda vez que es posible aplicar la procedencia de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993.

- La postura jurisprudencial sostiene que una vez se aplica el interés moratorio, este comprende el valor de la indexación, es decir, que, si los conceptos pretendidos en esta demanda se reconocen y pagan los intereses moratorios, habrá de entenderse que no es procedente que, de manera simultánea se condene a la indexación, como quiera que los primeros llevan implícita la actualización de la moneda.
- Con fundamento en lo anterior, y una vez comprobados que no se acreditan los presupuestos para que **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** sea condenada al reconocimiento y pago de los conceptos que se reclaman, debe concluirse que condenar a mi procurada, al reconocimiento y pago de los rubros aducidos en el libelo de la demanda, se derivaría en un cobro de lo no debido, prohibido por nuestro ordenamiento jurídico.
- Teniendo en cuenta que el enriquecimiento sin causa se configura cuando hay un enriquecimiento patrimonial a expensas de un empobrecimiento económico sin que medie causa legal para dicha relación, debe concluirse que condenar a **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** al reconocimiento y pago de los rubros aducidos en el libelo de la demanda, sería un enriquecimiento sin causa, pues no existe ningún argumento legal para legitimar o justificar el más mínimo pago en favor de la demandante.
- En el evento en que se establezca que la demandante le asiste algún derecho a cargo del Sistema de Riesgos Laborales, frente a las mismas, debe ser analizado por el juzgado el fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta que de acuerdo con la línea jurisprudencial el término de prescripción se debe contar a partir del momento en que los derechos pretendidos se hacen exigibles no desde la fecha en que se hace efectivo. Siendo así, los términos deben contabilizarse desde el momento en que se causa el derecho.
- Sin que implique confesión o aceptación de los hechos de la demanda, se propone la excepción de compensación teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 282 del Código General del Proceso, el cual es aplicable por analogía al CPT y de la SS.

Todo lo anterior, son argumentos suficientes para que este Juzgador, declare probadas todas y cada una de las excepciones propuestas en la presente contestación, considerando no solo que no existe fundamento legal, contractual ni jurisprudencial, para condenar a mí mandante, por cuanto, la actora no logró acreditar los requisitos mínimos exigidos por la norma para acceder al derecho pensional pretendido.

Consecuentemente, debe ser despachados desfavorablemente todas y cada una de las pretensiones propuestas con la demanda.

CAPITULO IV. **MEDIOS DE PRUEBA.**

Sírvase señor Juez, tener como pruebas las siguientes:

- **DOCUMENTALES**

1. Notificación del reconocimiento de la pensión de invalidez del 04/04/2022.
2. Histórico de pago de incapacidades medicas temporales a la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ.**
3. Oficio del 30/06/2022 proferido por mi representada como respuesta a la solicitud del 14/06/2022

- **INTERROGATORIO DE PARTE A LA DEMANDANTE**

Ruego ordenar y hacer comparecer a la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ** en calidad de demandante para que en audiencia absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante

cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda

• **TESTIMONIALES:**

Sírvase señor Juez, recepcionar la declaración testimonial de la siguiente persona, mayor de edad, para que se pronuncie sobre los hechos de la demanda y los argumentos de defensa expuestos en esta contestación.

- ✓ **Daniela Quintero Laverde** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.234.192.273, quien podrá citarse en la carrera 90 No. 45-198, teléfono 3108241711 y correo electrónico: danielaquinterolaverde@gmail.com, asesora externa de la sociedad.

CAPÍTULO IV.
ANEXOS:

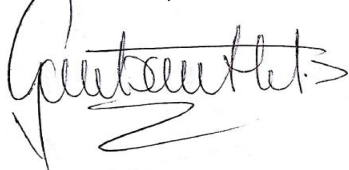
Acompaño a la presente demanda:

1. Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia
2. Poder debidamente conferido al suscrito
3. Constancia del correo eléctrico mediante el cual me confirieron poder para actuar.
4. Copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del suscrito.
5. Los documentos referenciados en el acápite de pruebas documentales.

CAPÍTULO V.
NOTIFICACIONES

- La parte demandante, a los correos electrónicos que reposan en el escrito de la demanda: liz94c@hotmail.com y procesos@tiradoescobar.com
- El suscrito podrá ser notificado en la Avenida 6 A Bis No. 35N – 100 Oficina 212, en la Ciudad de Cali, en la secretaría del despacho, y en el correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. 19.395.114 de Bogotá D.C
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

ARL

Sura 

Medellín, 04 de abril de 2022

Señora

LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ

C1144075353

Cr 93 # 4 B - 42 B Melendez

Celular: 3114330717

Santiago De Cali - Valle Del Cauca

Asunto: Notificación Dictamen de Invalidez

Le manifestamos que Seguros de Vida Suramericana S.A - ARL Sura, como consecuencia del ACCIDENTE DE TRABAJO ocurrido a usted el 27 DE JULIO DE 2020, está procediendo al reconocimiento de la pensión de invalidez, de acuerdo con la evaluación realizada por Medicina Laboral de ARL Sura, la cual le dio un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 52.72% con fecha de estructuración de la pérdida el 01 DE MARZO DE 2022, de conformidad con el Decreto 1507 de 12 de Agosto de 2014.

Según este porcentaje, usted tiene derecho a una pensión del 60% del ingreso base de liquidación (promedio de los SEIS meses o fracción de meses anteriores a la fecha del accidente, IBL \$7,983,253), lo cual equivale a una mesada de \$4,789,952.

La mesada para el presente año es de \$4,789,952 y se reconocerá a partir de la fecha de estructuración o a partir del día siguiente a la última incapacidad temporal, si esta es posterior.

ARL SURA no podrá reconocer el pago de incapacidades con fecha de inicio posterior a la fecha de esta comunicación, por cuanto no opera el pago simultaneo de incapacidad temporal y pensión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° parágrafo 2 de la Ley 776 de 2002.

En caso de presentarse alguna inquietud o controversia al respecto, por favor informarnos mediante comunicación escrita dirigida a la Dirección de Gestión Integral de Pagos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, donde con gusto estaremos dispuestos a aclararla o en caso necesario, proceder de acuerdo con los recursos adicionales previstos en la Ley.

Para lo anterior, hemos habilitados varios canales por medio de los cuales la comunicación puede ser enviada: CL 64N 5B 146 LOCAL 7 teléfono 6818900 SANTIAGO DE CALI.

Si se encuentra de acuerdo, le solicitamos diligenciar la información correspondiente a los requisitos de pensión de invalidez que adjuntamos y hacémosla llegar a la siguiente dirección: CL 64N 5B 146 LOCAL 7 teléfono 6818900 SANTIAGO DE CALI, con el fin de proceder a la liquidación y pago de la pensión.

. KAREN ANAYA.

. 1144085859

. 314 8605903

23-69-22

ARL



Para su información a continuación encontrará la referencia jurídica sobre el tema en mención:

"Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de pensiones COLPENSIONES, a las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. La cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales." (Decreto 0019 de 2012, artículo 142).

Cualquier información adicional con gusto la atenderemos.

VICEPRESIDENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Jorge Alveiro Benjumea Arcila", written over a horizontal line.

JORGE ALVEIRO BENJUMEA ARCILA
Director Gestión Integral de Pagos
ARL SURA

Firmo en señal de que he leído y comprendido el alcance de la presente comunicación.

Firma: _____

Fecha: _____

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

CONSULTA DE PAGO DE INCAPACIDADES POR CÉDULA / EXPEDIENTE

Expediente	Fecha Acc.	Controversia	Porcentaje de pago	Fecha Inicio Incap. Autor.	Fecha Fin Incap. Autor.	Dias Incap. Autor.	Salario	Ajuste IPC	Total IBC	Mes Salario	Valor Autorizado	Fecha Proceso	Pagado al afiliado	Lote
CEDULA : 1144075353		NOMBRE : ANAYA LOPEZ LIZETH PAOLA												
CONTRATO : 094002918		NIT : 811007601		EMPRESA : GRUPO EMI S.A.										
C.T.PAGADOR:MEDICOS - ENFERMEROS Y ASESOR DIRECCCR 48 # 14 - 49 AVENIDA LAS VEGAS								CIUDAD : MEDELLIN						
1310538443	05/06/2020	N	0	06/06/2020	06/06/2020	1	9,158,950	0	9,158,950	2020/05	367,884	24/07/2020	OPI 920624	1143878
1310538443	05/06/2020	N	0	08/07/2020	08/07/2020	1	10,706,998	0	10,706,998	2020/06	430,064	14/08/2020	OPI 928121	1145010
1310545098	27/07/2020	N	0	28/07/2020	10/08/2020	14	10,706,998	0	10,706,998	2020/06	6,020,902	01/09/2020	OPI 932316	1146260
1310545098	27/07/2020	N	0	11/08/2020	25/08/2020	15	10,706,998	0	10,706,998	2020/06	6,450,966	15/10/2020	OPI 943345	1147936
1310545098	27/07/2020	N	0	26/08/2020	24/09/2020	30	10,706,998	0	10,706,998	2020/06	12,901,933	15/10/2020	OPI 943345	1147936
1310545098	27/07/2020	N	0	24/11/2020	11/12/2020	18	6,891,562	0	6,891,562	2020/07	4,982,599	24/12/2020	OPI 965792	1151283
1310545098	27/07/2020	N	0	12/12/2020	10/01/2021	30	6,891,562	36,985	6,928,547	2020/07	8,348,899	28/01/2021	OPI 976995	1153264
1310545098	27/07/2020	N	0	11/01/2021	25/01/2021	15	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	4,219,016	18/02/2021	OPI 985805	1154029
1310545098	27/07/2020	N	0	26/01/2021	31/01/2021	6	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	1,687,606	18/02/2021	OPI 985805	1154029
1310545098	27/07/2020	N	0	02/02/2021	25/02/2021	24	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	6,750,425	21/03/2021	OPI 998363	1155285
1310545098	27/07/2020	N	0	26/02/2021	27/03/2021	30	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	8,438,032	16/04/2021	OPI 1007712	1156027
1310545098	27/07/2020	N	0	28/03/2021	26/04/2021	30	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	8,438,032	22/04/2021	OPI 1010085	1156248
1310545098	27/07/2020	N	0	27/05/2021	25/06/2021	30	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	8,438,032	10/06/2021	OPI 1027453	1157835
1310545098	27/07/2020	N	0	27/04/2021	26/05/2021	30	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	8,438,032	10/06/2021	OPI 1027453	1157835
1310545098	27/07/2020	N	0	26/06/2021	25/07/2021	30	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	8,438,032	29/07/2021	OPI 1041299	1158762
1310545098	27/07/2020	N	0	25/10/2020	23/11/2020	30	6,891,562	0	6,891,562	2020/07	8,304,332	30/07/2021	OPI 1042046	1158867
1310545098	27/07/2020	N	0	25/10/2020	23/11/2020	30	10,707,000	0	10,707,000	2020/06	4,597,601	18/08/2021	OPI 1048454	1158867
1310545098	27/07/2020	N	0	11/01/2021	25/01/2021	15	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	2,335,811	18/08/2021	OPI 1048486	1154029
1310545098	27/07/2020	N	0	26/01/2021	31/01/2021	6	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	934,325	18/08/2021	OPI 1048486	1154029
1310545098	27/07/2020	N	0	12/12/2020	10/01/2021	30	10,707,000	57,461	10,764,461	2020/06	4,622,274	18/08/2021	OPI 1048486	1153264
1310545098	27/07/2020	N	0	24/11/2020	11/12/2020	18	10,707,000	0	10,707,000	2020/06	2,758,561	18/08/2021	OPI 1048486	1151283
1310545098	27/07/2020	N	0	25/09/2020	24/10/2020	30	10,706,998	0	10,706,998	2020/06	12,901,933	28/08/2021	OPI 1052416	1159844
1310545098	27/07/2020	N	0	03/08/2021	01/09/2021	30	908,528	0	908,528	2021/04	1,094,776	21/09/2021	OPI 1061886	1160519
1310545098	27/07/2020	N	0	30/07/2021	02/08/2021	4	908,528	0	908,528	2021/04	145,970	21/09/2021	OPI 1061886	1160519
1310545098	27/07/2020	N	0	02/09/2021	01/10/2021	30	908,528	0	908,528	2021/04	1,094,776	13/10/2021	OPI 1072741	1161381
1310545098	27/07/2020	N	0	02/09/2021	01/10/2021	30	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	7,343,256	03/11/2021	OPI 1080994	1161381
1310545098	27/07/2020	N	0	03/08/2021	01/09/2021	30	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	7,343,256	03/11/2021	OPI 1080994	1160519

Fecha de Proceso : 30/06/2022 15:45

d_odi_x_afiliado_x_dni SURATEP

Página 1 de 3

PRESTAEC

F0195/09-0905/C

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

CONSULTA DE PAGO DE INCAPACIDADES POR CÉDULA / EXPEDIENTE

Expediente	Fecha Acc.	Controversia	Porcentaje de pago	Fecha Inicio Incap. Autor.	Fecha Fin Incap. Autor.	Dias Incap. Autor.	Salario	Ajuste IPC	Total IBC	Mes Salario	Valor Autorizado	Fecha Proceso	Pagado al afiliado	Lote
CEDULA : 1144075353		NOMBRE : ANAYA LOPEZ LIZETH PAOLA												
CONTRATO : 094002918		NIT : 811007601			EMPRESA : GRUPO EMI S.A.									
C.T.PAGADOR:MEDICOS - ENFERMEROS Y ASESOR DIRECCCR 48 # 14 - 49 AVENIDA LAS VEGAS								CIUDAD : MEDELLIN						
1310545098	27/07/2020	N	0	30/07/2021	02/08/2021	4	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	979,101	03/11/2021	OPI 1080994	1160519
1310545098	27/07/2020	N	0	26/07/2021	29/07/2021	4	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	1,125,071	17/11/2021	OPI 1085346	1162336
1310545098	27/07/2020	N	0	02/10/2021	31/10/2021	30	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	8,438,032	17/11/2021	OPI 1085552	1162386
1310545098	27/07/2020	N	0	01/11/2021	30/11/2021	30	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	8,438,032	15/12/2021	OPI 1097394	1163283
1310545098	27/07/2020	N	0	01/12/2021	30/12/2021	30	6,891,562	110,954	7,002,516	2020/07	8,438,032	27/12/2021	OPI 1102823	1163803
1310545098	27/07/2020	N	0	31/12/2021	29/01/2022	30	10,706,998	763,424	11,470,422	2020/06	13,821,859	02/03/2022	OPI 1127056	1164788
1310545098	27/07/2020	N	0	01/02/2021	01/02/2021	1	10,706,998	172,383	10,879,381	2020/06	436,988	04/03/2022	OPI 1127627	1165468
1310545098	27/07/2020	N	0	30/07/2021	02/08/2021	4	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	650,579	22/03/2022	OPI 1133750	1160519
1310545098	27/07/2020	N	0	26/07/2021	29/07/2021	4	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	650,579	22/03/2022	OPI 1133750	1162336
1310545098	27/07/2020	N	0	26/06/2021	25/07/2021	30	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	4,879,344	22/03/2022	OPI 1133750	1158762
1310545098	27/07/2020	N	0	27/04/2021	26/05/2021	30	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	4,879,344	22/03/2022	OPI 1133750	1157835
1310545098	27/07/2020	N	0	28/03/2021	26/04/2021	30	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	4,879,344	22/03/2022	OPI 1133750	1156248
1310545098	27/07/2020	N	0	26/02/2021	27/03/2021	30	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	4,879,344	22/03/2022	OPI 1133750	1156027
1310545098	27/07/2020	N	0	02/02/2021	25/02/2021	24	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	3,903,475	22/03/2022	OPI 1133750	1155285
1310545098	27/07/2020	N	0	01/12/2021	30/12/2021	30	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	4,879,344	22/03/2022	OPI 1133750	1163803
1310545098	27/07/2020	N	0	01/11/2021	30/11/2021	30	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	4,879,344	22/03/2022	OPI 1133750	1163283
1310545098	27/07/2020	N	0	02/10/2021	31/10/2021	30	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	4,879,344	22/03/2022	OPI 1133750	1162386
1310545098	27/07/2020	N	0	02/09/2021	01/10/2021	30	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	4,879,344	22/03/2022	OPI 1133750	1161381
1310545098	27/07/2020	N	0	03/08/2021	01/09/2021	30	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	4,879,344	22/03/2022	OPI 1133750	1160519
1310545098	27/07/2020	N	0	27/05/2021	25/06/2021	30	10,707,000	172,383	10,879,383	2020/06	4,879,344	06/04/2022	OPI 1140905	1157835
1310545098	27/07/2020	N	0	30/01/2022	28/02/2022	30	10,706,998	783,804	11,490,802	2020/06	13,846,416	06/04/2022	OPI 1140969	1165735
1310545098	27/07/2020	N	0	01/03/2022	30/03/2022	30	10,706,998	783,804	11,490,802	2020/06	13,846,416	04/05/2022	OPI 1150495	1166792

Fecha de Proceso : 30/06/2022 15:45

d_odi_x_afiliado_x_dni SURATEP

Página 2 de 3

PRESTAEC

F0195/09-0905/C

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

CONSULTA DE PAGO DE INCAPACIDADES POR CÉDULA / EXPEDIENTE

Expediente	Fecha Acc.	Controversia	Porcentaje de pago	Fecha Inicio Incap. Autor.	Fecha Fin Incap. Autor.	Dias Incap. Autor.	Salario	Ajuste IPC	Total IBC	Mes Salario	Valor Autorizado	Fecha Proceso	Pagado al afiliado	Lote
CEDULA : 1144075353		NOMBRE : ANAYA LOPEZ LIZETH PAOLA												
CONTRATO : 094002918		NIT : 811007601		EMPRESA : GRUPO EMI S.A.										
C.T.PAGADOR:MEDICOS - ENFERMEROS Y ASESOR DIRECCCR 48 # 14 - 49 AVENIDA LAS VEGAS									CIUDAD : MEDELLIN					
1310545098	27/07/2020	N	0	31/03/2022	28/06/2022	90	10,706,998	783,804	11,490,802	2020/06	41,539,249	03/06/2022	OPI 1163910	1167378
Totales por Centro de Trabajo Pagador ...										1198	312,734,594			
Totales por Empresa ...										1198	312,734,594			
Totales por Afiliado ...										1198	312,734,594			

Fecha de Proceso : 30/06/2022 15:45

d_odi_x_afiliado_x_dni SURATEP

Página 3 de 3

PRESTAEC

F0195/09-0905/C

Medellín, junio 30 de 2022

S22061426111175
EXP 1310545098
CC. 16929297

Señor(a)

ALVARO JOSÉ ESCOBAR LOZADA

PODERDANTE: **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ**

Teléfono: 4870055

Correo electrónico: notificaciones@tiradoescobar.com

Santiago de Cali – Valle de Cauca

Asunto: respuesta a derecho de petición, pensión invalidez.

Reciba un cordial saludo.

En atención a su petición entregada a Seguros de Vida Suramericana S.A. / ARL Sura, en la cual solicita:

1. Que se efectué reliquidación de la pensión de invalidez reconocida a la señora **LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ**, reconocida a partir del mes de marzo de 2022.
2. Que se reconozca y pague la diferencia existente, con la correspondiente indexación.

Nos permitimos manifestarle que en razón a lo solicitado y una vez verificados los hechos por usted presentados en conjunto con la información suministrada por nuestro sistema de información, se procede a generar respuesta clara y de fondo dentro de los siguientes términos.

Conforme a su petición primera, se identifica que durante el proceso de pensión por invalidez que se ha reconocido en favor de su poderdante, se tuvo en cuenta la fecha de estructuración del día primero(1) de marzo de 2022. Sin embargo, cabe decir, fueron tenidas en cuenta también las incapacidades temporales que se generaron hasta el día veintiocho (28) de junio de 2022, siendo procedente dar inicio a la liquidación del retroactivo desde el día siguiente a la terminación de dichas incapacidades, es decir: veintinueve (29) de junio de 2022 y no como fue solicitado en su petición.

En dicho aspecto y de acuerdo a la normativa vigente, parágrafo 2° del artículo 10° de la Ley 776 de 2002 “No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez”. En este mismo sentido, se expresa la Corte Constitucional al precisar que

si la fecha de estructuración de la invalidez coincide con el momento en que las incapacidades laborales se causan, se debe reconocer el derecho pensional y como éste se paga retroactivamente, no hay lugar al pago simultáneo de la prestación por concepto de incapacidad y por concepto de pensión según lo establecido en el artículo décimo de la ley 776 de 2002¹

Por lo expuesto, se encuentra improcedente el acceso a lo solicitado en su petición.

Ahora bien, anexamos al presente documento: relación de incapacidades temporales pagadas.

Recordamos que para el debido cálculo de la prestación económica de pensión de invalidez se tiene en cuenta lo previsto por el artículo 3° de la Ley 776 de 2002 -con relación al valor que tendrá el subsidio, siendo este el 100% del Ingreso Base de Cotización- y el parágrafo 2° del artículo 5° de la Ley 1562 de 2012 -con relación al Ingreso Base de Cotización que se debe tomar-.

Guía para la lectura de: Tabla/Relación de pagos por incapacidad temporal

Fecha fin de la incapacidad		Ingreso Base de Cotización		Ingreso Base para Liquidar		Valor total de la incapacidad		
Fecha Inicio Incap. Autor.	Fecha Fin Incap. Autor.	Días Incap. Autor.	Salario	Ajuste IPC	Total IBC	Mes Salario	Valor Autorizado	Fecha Proceso
23/02/2021	25/02/2021	3	1,750,434	0	1,750,434	2021/01	210,927	16/03/2021
26/02/2021	26/02/2021	1	1,750,434	0	1,750,434	2021/01	70,309	23/03/2021
01/03/2021	05/03/2021	5	1,220,067	0	1,220,067	2021/02	245,030	23/03/2021
08/03/2021	09/03/2021	2	1,220,067	0	1,220,067	2021/02	98,012	29/03/2021
24/03/2021	27/03/2021	4	1,220,067	0	1,220,067	2021/02	196,024	14/04/2021
29/03/2021	31/03/2021	3	1,220,067	0	1,220,067	2021/02	147,018	16/04/2021
05/04/2021	14/04/2021	10	1,803,825	0	1,803,825	2021/03	724,536	27/04/2021

Fecha inicial de la incapacidad Días de incapacidad Ajuste según Índice de Precios al Consumidor o Salario mínimo Periodo de cotización: Año y mes Fecha de autorización por ARL Sura

Cerramos esta comunicación, resaltando que, conforme lo determina el principio de *eficiencia* del Sistema de Seguridad Social Integral, esta ARL, como garante de los derechos que instaura no solo el principio mencionado, sino, también, las demás normas que regulan el Sistema de Riesgos Laborales, debe cerciorarse que los pagos que se efectúen, se hagan de forma correcta, todo ello sin incurrir en pagos dobles o indebidos.

¹ SENTENCIA DE TUTELA 097 de diez (10) de marzo de dos mil quince (2015). Bogotá D.C. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Toda la información pertinente al reconocimiento de prestaciones económicas podrá encontrarla en nuestra página www.arlsura.com, en la opción de *Guía de procesos y servicios administrativos* dentro del recuadro de *Accesos directos*, desde la página 33.

De manera semejante, también se ha dispuesto de un enlace a través de nuestro portal web: www.arlsura.com, para que pueda enviar sus solicitudes de consulta directamente a esta ARL.

Esperamos de esta forma estar brindando claridad frente a su solicitud, estaremos atentos a aclarar cualquier inquietud a través de nuestra Línea de Atención desde Medellín 4 44 4578, Bogotá 405 5911, Cali 380 8938, Barranquilla 319 7938, Bucaramanga 691 7938, Cartagena 642 4938, Pereira 313 8400, Manizales 881 1280, y desde el resto del país 018000 51 14 14.

Cordialmente,



Requerimientos Externos
Seguros de Vida Suramericana

Elaboró: LL
Revisó IAA

SOLICITUD ANTECEDENTES PROCESO ORDINARIO LABORAL|| DTE: ALBA LUCIA RIVAS OSORIO || DDO: PROTECCIÓN S.A. || LLAMADA EN G: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA || RAD: 76001310502220240008700

Notificaciones Judiciales SURA <notificacionesjudiciales@suramericana.com.co>

Lun 29/07/2024 8:54

Para:Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

 1 archivos adjuntos (307 KB)

PODER SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S_signe.pdf;

Señor(a)

JUZGADO TERCERO (03º) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

DEMANDANTE: LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ

DEMANDADO: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

RADICACIÓN: 76001310500320240030400

ASUNTO: PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE

Seguros de Vida Suramericana S.A. confiere poder al abogado Gustavo Alberto Herrera Avila.

Cordialmente,

Gerencia de Asuntos Legales

SURA COLOMBIA

notificacionesjudiciales@suramericana.com.co



Señor(a)
JUZGADO TERCERO (03º) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E.S.D.

PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: LIZETH PAOLA ANAYA LOPEZ
DEMANDADO: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
RADICACIÓN: 76001310500320240030400

ASUNTO: PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE

CARLOS FRANCISCO SOLER PEÑA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 80154041 de Bogotá D.C., en mi calidad de representante legal de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, comedidamente manifestó que en esa calidad confiero poder especial amplio y suficiente al Doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**, mayor de edad, abogado en ejercicio, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actuando en nombre de dicha sociedad la represente en el proceso de la referencia, se notifique del auto admisorio de la demanda y /o del llamamiento en garantía, los conteste, interponga recursos, descorra el traslado de los que interponga la parte actora o los demás convocados, proponga excepciones, solicite la práctica de las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso y realice todas las actuaciones inherentes a su calidad.

El apoderado queda facultado para notificarse, recibir, reasumir, sustituir, objetar el juramento estimatorio y en general para realizar todas las acciones necesarias e indispensables para el buen éxito del mandato a su cargo.

Solicito reconocer personería al mandatario para los fines de la gestión encomendada en los términos del artículo 77 del Código General del Proceso, incluyendo la facultad de sustituir este poder. Las facultades de transigir y desistir están sujetas a la autorización previa de la Vicepresidencia Jurídica y la facultad de conciliar a la decisión que adopte el Comité de defensa judicial y conciliación de la compañía.

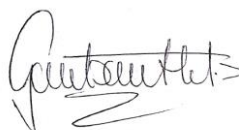
El presente poder se confiere en virtud del artículo 5º de la Ley 2213 de 2022 por lo que se procede a enviar desde la cuenta de notificaciones inscrita en el certificado de cámara de comercio y se manifiesta que nuestro apoderado cuenta con la dirección de correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



CARLOS FRANCISCO SOLER PEÑA
Representante Legal
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Acepto



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. 19.395.114 de Bogotá
T.P. 39.116 del C. S. de la J.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.395.114

HERRERA AVILA

APELLIDOS

GUSTAVO ALBERTO

NOMBRES

Gustavo Alberto Herrera Avila
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1960

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

06-OCT-1978 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Abel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100100-00252282-M-0019395114-20100825

0023575747A 1

34475431

304816

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

39116-D2

26/08/1986

16/06/1986

Tarjeta No.

Fecha de Expedición

Fecha de Gracia

GUSTAVO ALBERTO
HERRERA AVILA

19395114

Cedula

VALLE

Consejo Seccional

MILITAR NUEVA GRANAD
Universidad



Francisco Escobar Henríquez
Presidente Consejo Superior de la Judicatura

Gustavo Herrera

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.



Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 2529344942895245

Generado el 02 de julio de 2024 a las 10:48:09

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. pudiendo emplear la sigla "Seguros de Vida SURA"

NIT: 890903790-5

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Anónima De Nacionalidad Colombiana. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 2381 del 04 de agosto de 1947 de la Notaría 3 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). bajo la denominación de COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

Escritura Pública No 1502 del 15 de septiembre de 1997 de la Notaría 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Se protocolizó el acto de escisión de la COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A., la cual segrega una parte de su patrimonio con destino a la constitución de la sociedad denominada "PORTAFOLIO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A."

Resolución S.F.C. No 2197 del 01 de diciembre de 2006 La Superintendencia Financiera aprueba la escisión de la Compañía Suramericana de Seguros S.A., la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. y la Compañía Suramericana de Capitalización S.A., constituyendo la sociedad beneficiaria "Sociedad Inversionista Anónima S.A.", la cual no estará sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, protocolizada mediante Escritura Pública 2166 del 15 de diciembre de 2006 notaría 14 de Medellín, aclarada mediante Escritura Pública 0339 del 02 de marzo de 2007 Notaría 14 de Medellín

Resolución S.F.C. No 0810 del 04 de junio de 2007 por medio de la cual la Superintendencia Financiera aprueba la cesión de activos, pasivos, contratos y de cartera de seguros de la Compañía Agrícola de Seguros S.A. y de la Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A. a favor de la Compañía Suramericana de Seguros S.A., la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. y de la Compañía Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de Vida S.A. SURATEP.

Escritura Pública No 0821 del 13 de mayo de 2009 de la Notaría 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Cambia su razón social de COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. por la de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Escritura Pública No 35 del 22 de enero de 2018 de la Notaría 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Cambia su razón social de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. por la de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., pudiendo emplear la sigla "Seguros de Vida SURA"

Resolución S.F.C. No 01753 del 10 de diciembre de 2018 ,por medio de la cual la Superintendencia Financiera no objeta la fusión por absorción entre Seguros de Vida Suramericana S.A. y Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A., protocolizada mediante Escritura Pública No. 5116 del 17 de diciembre de 2018, Notaría 25 de Medellín.

Resolución S.F.C. No 0440 del 04 de mayo de 2020 , por la cual se aprueba la escisión parcial de Seguros de Vida Suramericana S.A. Entidad Escidente y Suramericana S.A. es una sociedad inscrita y un emisor de valores Entidad Beneficiaria, protocolizada mediante Escritura Pública 1188 del 18 de mayo de 2020 de la Notaría 25 de Medellín.



Certificado Generado con el Pin No: 2529344942895245

Generado el 02 de julio de 2024 a las 10:48:09

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 806 del 26 de septiembre de 1947

REPRESENTACIÓN LEGAL: REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la Sociedad será múltiple y la gestión de los negocios sociales estará simultáneamente a cargo de un Presidente, de uno o más Vicepresidentes, del Gerente de Vida y Rentas, el Gerente de Inversiones y Tesorería; el Secretario General, y demás Representantes Legales, según lo defina la Junta Directiva quienes podrán actuar conjunta o separadamente. Para efectos exclusivos de representar a la Sociedad en las gestiones relacionadas con el ramo de riesgos laborales, tendrán también la calidad de representantes legales el Gerente de Producto ARL, el Gerente Comercial ARL y el Gerente Técnico ARL, quienes serán designados por la Junta Directiva y podrán actuar de manera conjunta o separada. Así mismo, se elegirán uno o más Gerentes Regionales, que serán nombrados por la Junta Directiva y ejercerán la representación legal de la Sociedad con las mismas facultades y atribuciones establecidas en estos estatutos para dicho cargo, funciones que podrán ejercer únicamente dentro de su respectiva región y zonas que sean a ellas suscritas. Todos los empleados de la Sociedad, a excepción del Auditor Interno y de los dependientes de éste, si los hubiere, están subordinados al Presidente en el desempeño de sus cargos. **PARÁGRAFOS.** Para efectos de la representación legal judicial de la Sociedad, tendrá igualmente la calidad de representante legal el Gerente de Asuntos Legales o su suplente, así como los abogados que para tal fin designe la Junta Directiva, quienes representarán a la Sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, y/o con funciones administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado, así mismo, los representantes legales judiciales podrán otorgar poder a abogados externos para representar a la Sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas y/o con funciones administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado. **FUNCIONES:** Son funciones de los representantes legales: a) Representar legalmente la Sociedad y tener a su cargo la inmediata dirección y administración de sus negocios. b) Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. c) Celebrar en nombre de la Sociedad todos los actos o contratos relacionados con su objeto social. d) Nombrar y remover libremente a los empleados de sus dependencias, así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en ejercicio de la delegación de funciones que pueda hacerle la Junta Directiva. Así mismo nombrar los administradores de los establecimientos de comercio. e) Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes sociales y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos. f) Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente, y mantener adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales; someter a su consideración los estados financieros de prueba y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la Sociedad y con sus actividades. g) Presentar a la Asamblea General de Accionistas anualmente, en su reunión ordinaria, los estados financieros de fin de ejercicio, junto con los informes y proyecto de distribución de utilidades y demás detalles e informaciones especiales exigidos por la ley, previo el estudio, consideraciones y aprobación inicial de la Junta Directiva. h) Someter a aprobación de la Junta Directiva, en coordinación con el oficial de cumplimiento, el manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT y sus actualizaciones. i) Las demás que le corresponden de acuerdo con la ley y estos Estatutos. **FACULTADES:** Los Representantes Legales están facultados para celebrar o ejecutar, sin otra limitación que la establecida en los Estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Junta Directiva, o por la Asamblea General de Accionistas, todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, o que tengan el carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que la Sociedad persigue, y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad. Los Representantes Legales podrán transigir, comprometer y arbitrar los negocios sociales, promover acciones judiciales e interponer todos los recursos que fueren procedentes conforme a la ley, recibir, sustituir, adquirir, otorgar y renovar obligaciones y créditos, dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados o extrajudiciales y delegar facultades, otorgar mandatos y sustituciones con la limitación que se desprende de estos Estatutos. La Sociedad tendrá un Secretario General que será propuesto por el Presidente de la Sociedad y nombrado por la Junta Directiva, el cual será a su vez el Secretario de la Asamblea General de Accionistas, de la Junta Directiva y de sus respectivos Comités. En ausencia absolutas, temporales, o accidentales, la Junta Directiva, la Alta Gerencia o los miembros de los Comités podrán designar un Secretario Ad Hoc para ejercer una o varias de las



Certificado Generado con el Pin No: 2529344942895245

Generado el 02 de julio de 2024 a las 10:48:09

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

funciones del Secretario General en su ausencia. El Secretario Ad Hoc no tendrá representación legal; excepto si la misma ha sido otorgada de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos. El secretario General no podrá ser miembro de la Junta Directiva. FUNCIONES: Además de las funciones de carácter especial que le sean asignadas por la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva, o por la Alta Gerencia, el Secretario General tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: (J) La Representación legal de la Sociedad. (K) Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de Accionistas, de la Junta Directiva y de los Comités de Junta, y autorizar con su firma las copias y extractos que de ellas se expidan. (L) Llevar a cabo la expedición y refrendación de títulos de acciones, así como la inscripción de actos o documentos en el libro de registro de acciones. (M) Comunicar las convocatorias para las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, de la Junta Directiva y de sus respectivos Comités. (N) Asistir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, de la Junta Directiva y de sus respectivos Comités. (O) Coordinar la organización de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, de la Junta Directiva y de sus respectivos Comités, de conformidad con lo establecido en la ley y en estos Estatutos. (P) Coordinar la preparación del orden del día de las reuniones. (Q) Apoyar al Presidente de la Junta Directiva con el suministro de la información a los miembros de Junta Directiva de manera oportuna y en debida forma. (R) Asegurarse que las decisiones adoptadas en la Asamblea General de Accionistas, en la Junta Directiva y en sus respectivos Comités, efectivamente se incorporen en las respectivas actas. (S) Dirigir la administración de documentos y archivo de la secretaría general de la Sociedad, y velar por la custodia y conservación de los libros, escrituras, títulos, comprobantes y demás documentos que se le confíen. (T) Gestionar, archivar y custodiar la información confidencial de la Sociedad. (U) Atender las consultas y/o reclamos que se presenten por parte de los accionistas, autoridades y demás grupos de interés, para lo cual contará con personal calificado. (V) Ser el puente de comunicación entre los accionistas y los Administradores, o entre estos últimos y la Sociedad. (W) Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva, y garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados, de acuerdo con lo previsto en los presentes Estatutos y la normatividad vigente. (X) Las demás que le asigne la Junta Directiva. (Escritura Pública 764 del 21/07/2022 Notaría 14 de Medellín)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

CARGO

Juan David Escobar Franco
Fecha de inicio del cargo: 05/02/2016

CC - 98549058

Presidente

Luis Guillermo Gutiérrez Londoño
Fecha de inicio del cargo: 01/12/2016

CC - 98537472

Representante Legal en Calidad
de Vicepresidente

Ana Cristina Gaviria Gómez
Fecha de inicio del cargo: 20/05/2021

CC - 42896641

Vicepresidente de Seguros

Diego Alberto De Jesus Cardenas
Zapata
Fecha de inicio del cargo: 22/09/2022

CC - 98527423

Gerente Regional Centro

Alejandro Ossa Cárdenas
Fecha de inicio del cargo: 27/07/2023

CC - 94517028

Gerente Regional Occidente

Juliana Aranguren Cárdenas
Fecha de inicio del cargo: 13/05/2021

CC - 1088248238

Representante Legal Judicial

Maria Nathalia Vallejo Franco
Fecha de inicio del cargo: 24/04/2024

CC - 1088331874

Representante Legal Judicial

Daniela Castro Gaitan
Fecha de inicio del cargo: 18/03/2024

CC - 1234091324

Representante Legal Judicial

Santiago García Pinilla
Fecha de inicio del cargo: 18/03/2024

CC - 1010145951

Representante Legal Judicial

Juliana Salazar Mesa
Fecha de inicio del cargo: 02/05/2023

CC - 1037629278

Representante Legal Judicial



Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 2529344942895245

Generado el 02 de julio de 2024 a las 10:48:09

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Sara Valencia Morales Fecha de inicio del cargo: 02/05/2023	CC - 1036641080	Representante Legal Judicial
Daniela Isaza Lema Fecha de inicio del cargo: 25/11/2022	CC - 1037617487	Representante Legal Judicial
Carolina Montoya Vargas Fecha de inicio del cargo: 26/10/2022	CC - 43871751	Representante Legal Judicial
Andrés Felipe Ayora Gómez Fecha de inicio del cargo: 11/04/2022	CC - 1152196547	Representante Legal Judicial
Claudia Marcela Saldarriaga Álvarez Fecha de inicio del cargo: 11/04/2022	CC - 1037589956	Representante Legal Judicial
Cindy Paola Plata Zarate Fecha de inicio del cargo: 12/11/2021	CC - 1140863452	Representante Legal Judicial
Carlos Francisco Soler Peña Fecha de inicio del cargo: 27/08/2021	CC - 80154041	Representante Legal Judicial
Nazly Yamile Manjarrez Paba Fecha de inicio del cargo: 27/08/2021	CC - 32939987	Representante Legal Judicial
Miguel Orlando Ariza Ortiz Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 1101757237	Representante Legal Judicial
María Del Pilar Vallejo Barrera Fecha de inicio del cargo: 01/07/2004	CC - 51764113	Representante Legal Judicial
Ana Maria Rodríguez Agudelo Fecha de inicio del cargo: 10/04/2012	CC - 1097034007	Representante Legal Judicial
Diego Andres Avendaño Castillo Fecha de inicio del cargo: 10/02/2014	CC - 74380936	Representante Legal Judicial
Ana María Restrepo Mejía Fecha de inicio del cargo: 14/04/2016	CC - 43259475	Representante Legal Judicial
Natalia Andrea Infante Navarro Fecha de inicio del cargo: 01/11/2016	CC - 1037602583	Representante Legal Judicial
Maria Alejandra Zapata Pereira Fecha de inicio del cargo: 01/11/2016	CC - 1151935338	Representante Legal Judicial
David Ricardo Gómez Restrepo Fecha de inicio del cargo: 20/04/2017	CC - 1037607179	Representante Legal Judicial
Julián Alberto Cuadrado Luengas Fecha de inicio del cargo: 02/11/2017	CC - 1088319072	Representante Legal Judicial
Lina Marcela García Villegas Fecha de inicio del cargo: 06/06/2018	CC - 1128271996	Representante Legal Judicial
Diana Carolina Gutiérrez Arango Fecha de inicio del cargo: 26/09/2018	CC - 1010173412	Representante Legal Judicial
Lina Maria Angulo Gallego Fecha de inicio del cargo: 19/12/2018	CC - 67002356	Representante Legal Judicial
Ana Isabel Mejía Mazo Fecha de inicio del cargo: 12/02/2019	CC - 43627601	Representante Legal Judicial
Carlos Augusto Moncada Prada Fecha de inicio del cargo: 12/02/2019	CC - 91535718	Representante Legal Judicial



Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 2529344942895245

Generado el 02 de julio de 2024 a las 10:48:09

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Natalia Alejandra Mendoza Barrios Fecha de inicio del cargo: 15/02/2019	CC - 1143139825	Representante Legal Judicial
Juan Diego Maya Duque Fecha de inicio del cargo: 12/11/2019	CC - 71774079	Representante Legal Judicial
July Natalia Gaona Prada Fecha de inicio del cargo: 05/02/2020	CC - 63558966	Representante Legal Judicial
Marisol Restrepo Henao Fecha de inicio del cargo: 05/04/2020	CC - 43067974	Representante Legal Judicial
Carolina Sierra Vega Fecha de inicio del cargo: 29/05/2020	CC - 43157828	Representante Legal Judicial
Daniel José Alzate López Fecha de inicio del cargo: 09/11/2023	CC - 7552930	Gerente Regional Antioquia
Javier Ignacio Wolff Cano Fecha de inicio del cargo: 07/03/2013	CC - 71684969	Gerente Regional Eje Cafetero
Rafael Enrique Díaz Granados Nader Fecha de inicio del cargo: 20/02/2012	CC - 72201681	Gerente Regional Zona Norte
Luz Marina Velásquez Vallejo Fecha de inicio del cargo: 02/05/2019	CC - 43584279	Vicepresidente de Talento Humano
Melisa González González Fecha de inicio del cargo: 30/05/2019	CC - 1128273241	Gerente de Inversiones y Tesorería
Guillermo Alberto Gaviria Sanin Fecha de inicio del cargo: 21/09/2023	CC - 71776446	Gerente de Vida y Rentas
Richard Gandur Jacome Fecha de inicio del cargo: 28/02/2019	CC - 88139732	Gerente ARL Regional Norte
Iván Ignacio Zuloaga Latorre Fecha de inicio del cargo: 07/03/2019	CC - 98550799	Gerente de Producto ARL
Andrés Felipe Gómez Mena Fecha de inicio del cargo: 13/10/2022	CC - 16227922	Gerente Técnico ARL
María Eugenia Osorno Palacio Fecha de inicio del cargo: 28/03/2019	CC - 42785795	Gerente ARL Regional Antioquia
Paola Morayma Arbelaez Enriquez Fecha de inicio del cargo: 24/05/2022	CC - 52525083	Gerente ARL Regional Centro
Mauricio Alvarez Gallo Fecha de inicio del cargo: 01/08/2019	CC - 10131025	Gerente ARL Regional Occidente
Anita María Toro Rosas Fecha de inicio del cargo: 25/05/2023	CC - 66808964	Gerente Comercial ARL
Carolina Sierra Vega Fecha de inicio del cargo: 13/07/2023	CC - 43157828	Secretaria General y Gerente de Asuntos Legales

RAMOS: Resolución S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Accidentes personales, colectivo vida, salud, vida grupo, vida individual. con Resolución S.F.C. Nro. 1419 del 24/08/2011 : se revoca la autorización concedida a Seguros de Vida Suramericana S.A., para operar el ramo de seguro Colectivo de Vida

Resolución S.B. No 1320 del 29 de abril de 1993 exequias

Resolución S.B. No 785 del 29 de abril de 1994 seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia



Certificado Generado con el Pin No: 2529344942895245

Generado el 02 de julio de 2024 a las 10:48:09

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

Resolución S.B. No 1129 del 14 de junio de 1994 seguro de pensiones ley 100

Resolución S.B. No 685 del 02 de junio de 1998 pensiones de jubilación mediante circular externa 052 de 20 de diciembre de 2002 el ramo de pensiones de jubilación, se denominará en adelante ramo de pensiones voluntarias

Resolución S.B. No 999 del 30 de junio de 1999 grupo educativo, con resolución 0638 del 26/03/2010 se revoca la autorización concedida mediante resolución 0999 del 30 de junio de 2009 para operar el ramo de seguro educativo.

Resolución S.B. No 1127 del 02 de octubre de 2002 enfermedades de alto costo

Resolución S.B. No 129 del 16 de febrero de 2004 formaliza la autorización a Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., para operar el ramo de seguro de Pensiones con Conmutación Pensional a partir del 23 de diciembre de 2002, fecha de entrada en vigencia de la Circular Externa 052 de diciembre 20 de 2002, así como la utilización del modelo de la póliza de Seguro de Pensiones con Conmutación Pensional enviadas por la compañía a esta Entidad.

Resolución S.F.C. No 1535 del 13 de septiembre de 2011 autoriza operar ramo de desempleo

Resolución S.B. No 0557 del 17 de abril de 2012 autoriza operar el ramo de rentas voluntarias

Escritura Pública No 5116 del 17 de diciembre de 2018 de la Notaría 15 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Como consecuencia de la absorción de Seguros de Riesgos Labores Suramericana S.A. "ARL Sura", asume el ramo autorizado mediante Resolución 3241 del 29 de diciembre de 1995: Riesgos profesionales (Ley 1562 del 11 de julio de 2012, modifica la denominación por la de Riesgos Laborales)

NATALIA GUERRERO RAMÍREZ

**NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."